



**Consejo Económico
y Social**

Distr.
GENERAL

E/CN.4/2003/NGO/60*
15 de marzo de 2003

ESPAÑOL, FRANCÉS E INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
59º período de sesiones
Tema 9 del programa provisional

CUESTIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

Exposición por escrito* por Pax Christi Internacional, organización no gubernamental
reconocida como entidad consultiva especial

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

[30 de enero de 2003]

* Nueva tirada por razones técnicas.

** Se distribuye esta exposición escrita sin editar, en los lenguajes, tal como ha sido recibida de la Organización no gubernamental.

CONDENA DE LA VIOLENCIA BASADA EN LA RELIGIÓN EN PAKISTAN

Pax Christi, el movimiento internacional católico de paz, desea llamar la atención de los miembros de la 59ª Comisión por los Derechos Humanos de la ONU hacia la violencia que ha recibido la comunidad cristiana en Pakistán lo largo del año 2002.

Las instituciones dedicadas a servir a la sociedad paquistaní y que necesitan protección y seguridad, tales como escuelas, hospitales, iglesias y una organización de servicio social, han sido el blanco de ataques violentos. Siete de tales ataques se realizaron en menos de 14 meses, el primero ocurrido en Bahawalpur, en la región sur de Punjab, cuando el 28 de octubre de 2001 16 personas fueron asesinadas y 40 heridas mientras rezaban en la iglesia. El 17 de marzo de 2002, una granada fue lanzada al interior de una iglesia en Islamabad asesinando a cinco personas e hiriendo a otras 45.

En agosto de 2002, otros dos ataques sucedieron casi simultáneamente dejando a la minoría cristiana con un sentimiento de desamparo. Una escuela de la comunidad minoritaria en Murree fue atacada el 5 de agosto dejando un saldo de seis fallecimientos; casi inmediatamente después, el 9 de agosto seis enfermeras fueron asesinadas durante un ataque a un hospital en Taxila; el 25 de septiembre, siete miembros de una organización de servicio social, IDARA-E-AMAN-OINSAF (Comité de Justicia y Paz) en Karachi, fueron disparados a quemarropa después de ser amordazados y atados. Otro atentado con granadas de mano se realizó en octubre 4 de 2002 pero afortunadamente, nadie salió lastimado.

Miembros de la comunidad, así como organizaciones dentro y fuera de Pakistán han llamado al gobierno paquistaní a asegurar una investigación de todos estos ataques. A la fecha, sólo siete personas han sido arrestadas en conexión al ataque en Bahawalpur, pero no recibieron ningún juicio y fueron asesinadas durante encuentros con la policía, de acuerdo a los informes de los medios paquistaníes (marzo 11 y julio 28, 2002). Las muertes en características similares de otros tres sospechosos fueron reportadas después del ataque en Murree pero no ha habido una investigación clara ni juicio de las personas responsables de estos ataques.

A pesar de que el gobierno asegura mayor asistencia, las súplicas para asegurar las instituciones relacionadas con la comunidad, no han tenido resultados. Pax Christi Internacional comparte la preocupación de los miembros de la comunidad y la idea de que este fracaso gubernamental ha creado un clima de impunidad que resultó en otro ataque el 24 de diciembre de 2002 a una iglesia en Chianwala, una aldea en Daska, donde 3 niñas murieron y la mayoría de los 11 heridos fueron mujeres y niñas. Al día siguiente, otro herido falleció en el hospital y otros tres perdieron uno o ambos ojos a consecuencia de las heridas.

Todos estos incidentes indican cierta apatía respecto a la seguridad de los ciudadanos no musulmanes. A pesar de que la policía fracasó en la conducción de una investigación de los incidentes en Karachi y Daska, la Imam local fue identificada como responsable de realizar una campaña de odio en contra de la minoría cristiana, y recibió ciertos favores durante la investigación debido a su afiliación a un partido político-religioso. Dicho partido también usó a los medios locales en un intento para

implicar a la comunidad cristiana arguyendo que el ataque fue el resultado de un conflicto interno entre la congregación. La propaganda no tuvo éxito pues los cristianos son una comunidad totalmente pacífica y porque la gran mayoría de la gente no aceptó las falsas acusaciones.

Pax Christi está preocupado porque esta violencia en contra de los miembros de una comunidad pakistaní minoritaria, exagera profundos sentimientos de inseguridad en una comunidad que ya de por sí es afectada por la ley anti- blasfemia, sección 295C del Código Penal de Pakistán.

El 7 de mayo de 2002, Aslam Masih fue sentenciado a tres cadenas perpetuas y a pagar una multa de Rs. 100,000 por cargos de blasfemia. El 29 de junio, Kingri Masih, fue sentenciado a muerte y multado por Rs. 50,000 bajo los mismos cargos. Un número significativo de personas ha sido asesinado después de ser acusados por blasfemia; los casos más recientes fueron los de Zahid Shah of Chak Jhumra y Yousaf Ali de Lahore, el primero, fue apedreado a muerte y el segundo baleado por uno de sus compañeros de celda en la prisión Kot Lakhpat. La ley anti blasfemia no protege la vida del acusado, sino que crea impunidad a aquellos que quieren eliminar a los liberales y musulmanes como Justice Arif Iqbal Bhatti, asesinado por liberar algunos acusados de blasfemia.

Estas leyes han probado ser discriminatorias y con propensión al (mal) uso en caso de enemistades personales, celos, etc. Los casos de Ayub Masih, Naimat Ahmer y Manzoor Masih, así como muchos otros, prueban que la ley falla en atacar la causa y la intención de un acto catalogado como una ofensa. La ignorancia de este importante aspecto de la justicia criminal ha hecho que las leyes (sección 295 B y C; 298 A, B, y C) sean técnicamente redundantes y con propensión a ser abusadas.

Pax Christi se complace con la absolución de muchos acusados por la Suprema Corte, pero queda preocupado porque la ley anti-blasfemia continua siendo la razón del desplazamiento de personas, problemas de seguridad personal y conflictos sociales con poca reacción por parte del gobierno para prevenir todo ello.

Pax Christi Internacional cree que los ataques a las instituciones que ofrecen un servicio, tanto a las minorías, como a la sociedad pakistaní, son el indicador de que el gobierno ha fracasado en asegurar la seguridad y bienestar de sus ciudadanos. Lo que es más, el fracaso en llevar a la justicia a los perpetradores de los ataques del año 2002, perpetúa la creencia de que tales actos de violencia podrían quedar impunes. Lamentamos el fracaso del gobierno pakistaní para mantener los derechos básicos de sus ciudadanos.

Pax Christi Internacional reitera que es responsabilidad del gobierno pakistaní el garantizar la seguridad de todas las organizaciones de bienestar y civiles, así como de todos los ciudadanos del país, independientemente de su afiliación religiosa. Donde los ciudadanos y las organizaciones civiles de las comunidades minoritarias parecen estar particularmente vulnerables a actos violentos, el gobierno está obligado a tomar medidas que garanticen su seguridad.

Pax Christi Internacional hace un llamado a la Comisión y recomienda que:

- Pakistán demuestre su compromiso con su ciudadanía al establecer una investigación judicial de alto nivel sobre la violencia regional; tal investigación traerá exitosamente a los perpetradores de esos crímenes a la justicia. También se debe asegurar la protección a los testigos de los ataques y a aquellos cuyas vidas permanezcan bajo amenaza constante.
- Pakistán reafirme el derecho de todos sus ciudadanos a vivir en una sociedad libre de miedo, inseguridad y discriminación, y tome acciones decisivas para garantizar la seguridad de aquellas comunidades más vulnerables a los ataques.
- Pakistán tome acción inmediata para reformar su Código Penal para asegurar que la ley de la blasfemia no sea usada para hacer víctimas a miembros inocentes de la comunidad.

Dentro del escenario internacional, el presidente paquistaní, Pervez Musharraf ha repetido constantemente su compromiso de apoyo a la “Guerra contra el Terrorismo”. Recordamos al presidente de su primera responsabilidad con los ciudadanos de su propio país para asegurar que ellos no sean las víctimas inocentes de cualquier campaña terrorista como tal. Todos los ciudadanos de Pakistán, independientemente de su credo, sexo o clase, tienen el derecho a vivir en paz, seguridad y libres de cualquier forma de intimidación.
